

ESPAÑA VA BIEN... ¿PARA QUIÉN?

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

SANTIAGO NAVARRO MESEGUER

Alcanzamos en el calendario un nuevo Primero de Mayo, y volvemos a hacerlo entre noticias de corrupción, estadísticas que evidencian la consolidación de la precariedad laboral, nuevas alarmas de desigualdad social... La actualidad de nuestro país parece atrapada en una suerte de *Día de la Marmota* y, sin embargo, ha habido un cambio bastante significativo en los últimos tiempos: la palabra crisis se ha esfumado de los discursos oficiales, de las editoriales de ciertos medios, de los balances de cuentas de las grandes empresas, de las más reputadas previsiones macroeconómicas.

La crisis ya es “historia del pasado”, como dijo hace unos años, con su particular querencia por la tautología, el Presidente Rajoy. Y lo es porque ha terminado el proceso de desagüe de sus consecuencias hacia la clase trabajadora, donde ya esas consecuencias no son “crisis”, sino cotidianidad.

Ese y no otro era el fin de las políticas de “austeridad”, de las reformas laborales, de los recortes en prestaciones y servicios públicos. No hay otra forma de explicar que, en plena escalada del paro, se abaratasen los despidos y se recortaran las prestaciones por desempleo; que justo cuando estallaba la pobreza en los hogares, se encareciera o restringiese el acceso a los servicios sociales, a la sanidad o a la educación públicas.

De esta forma, la recuperación económica ha pasado a ser, para quienes nos gobiernan, un concepto por completo ajeno a la dignidad laboral o al bienestar ciudadano. No hay crisis aunque los bancos rescatados sigan desahuciando a las familias, no la hay aunque la mitad de las pensiones estén por debajo de la pobreza y la mitad de los parados no tengan ninguna ayuda; no la hay, aunque a muchos el salario ya no les alcance para vivir con dignidad.

El crecimiento de las desigualdades, sin embargo, es un arma de doble filo, porque no sólo depara un alto coste social, como estamos viendo, sino también un alto coste económico, como veremos, en no mucho tiempo, si no se hace nada por corregirlo. Las injerencias de las élites económicas en las políticas públicas, sirven al solo interés de proteger sus privilegios, promoviendo desinversiones en educación, en investigación, en sanidad.. y limitando el desarrollo de los derechos laborales y sociales. Con ello se inhibe la movilidad social, se desaprovecha el potencial humano de una gran parte de la población y se perjudica gravemente el consumo. Su coste, en definitiva, será muy superior, en el medio plazo, al ahorro inmediato por el que hoy se está tolerando.

En particular, la reforma laboral de 2012 y la precariedad que ha generalizado en nuestro mercado de trabajo, contribuyen como pocas cosas a alimentar esa desigualdad. Uno de los mayores éxitos de esa reforma fue, precisamente, conseguir debilitar la fuerza de los representantes de los trabajadores en la determinación de las condiciones de trabajo, en beneficio de una mayor discrecionalidad empresarial.

La limitación de la ultraactividad o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa han supuesto graves desequilibrios en la negociación colectiva, principal herramienta de redistribución de la riqueza, propiciando una tendencia a la baja de los salarios, a su vez, principal fuente de ingresos de las familias.

Y el perjuicio de esa devaluación salarial ha sido doble, puesto que también ha supuesto una sustancial rebaja de los ingresos de la Seguridad Social con la que se ha justificado, indecentemente, el recorte sufrido por las pensiones.

Lo que no ha resuelto la reforma laboral ha sido el uso abusivo y fraudulento que sigue haciéndose de la contratación temporal; así como tampoco ha podido atribuírsele el descenso del desempleo, que está vinculado, en su mayor parte, al repunte de actividades estacionales de bajo valor añadido y a la pérdida de población activa. Eso sí, la precariedad ha aprovechado bien sus “ayudas” para extenderse aún más, por ejemplo, con el fenómeno de reparto del trabajo que alentó la desregulación del empleo a tiempo parcial o el llamado contrato de apoyo a emprendedores que puede rescindirse durante todo un año sin causa ni indemnización.

Pero la precariedad tiene también consecuencias innegables sobre la seguridad y salud de los trabajadores. El aumento de la siniestralidad laboral que estamos viviendo en nuestra Región, que en 2016 dejó un balance de 33 fallecidos, bien merece una profunda y generalizada reflexión sobre ese modelo de relaciones laborales en el que “todo vale”, al que nos están pidiendo que nos “acostumbremos”.

Por todo esto, no seremos nosotros, los sindicatos de clase, quienes compremos, ni al Gobierno ni a la Patronal, su enésima edición del “*España va bien*” y así se lo vamos a decir con esta movilización del Primero de Mayo y todas las que sean necesarias. Si están dispuestos a negociar, tendrán que dejar de obviar los problemas, graves y serios, que siguen teniendo que afrontar a diario los trabajadores y sus familias.

Los trabajadores y trabajadoras tenemos que recordar que, ejercer la participación activa y la presión social, a través de la movilización y la sindicación, fue lo que nos permitió conquistar una democracia, unos derechos sociales, laborales y unas libertades públicas que, cada día, estamos viendo más amenazados. Defender esas conquistas, defender una España que vaya bien para todos, y no sólo para unos pocos, pasa, también hoy, por el mismo camino.

Antonio Jiménez Sánchez es Secretario general de UGT de la Región de Murcia

Santiago Navarro Meseguer es Secretario general de CCOO de la Región de Murcia